

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, cuatro (04) de junio de dos mil veintiuno (2021)

DEMANDANTE	: LIGIA LUCÍA GONZÁLEZ AVALOS
DEMANDADO :	: ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. y COLPENSIONES
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-017-2020-00356-01
RADICADO INTERNO	: 101-21
DECISIÓN	: CONDENA, ADICIONA Y CONFIRMA
ACTA NÚMERO	: 143

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, procede a emitir sentencia de segunda instancia en la que se estudia el recurso de apelación, en el proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

De conformidad con el **Decreto 806 de 2020**: “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, artículo 15, la sentencia se profiere escrita.

Se reconoce personería al Dr, Darío Mauricio Tobón Chamorro, como apoderado de Colpensiones según el poder de sustitución otorgado por cumplir con los requisitos del artículo 75 del C.G.P.

ANTECEDENTES

La parte demandante solicita, se DECLARE la nulidad y/o ineficacia del acto de traslado del Régimen de Prima Media al Régimen de Ahorro Individual; que tiene derecho a trasladarse al Régimen de Prima Media administrado por Colpensiones. Como consecuencia de lo anterior, se ordene a las demandadas que autoricen el traslado de la demandante a Colpensiones. Se le ORDENE a la sociedad PROTECCIÓN S.A. a trasladar los aportes que haya efectuado la demandante a dicho fondo con los respectivos rendimientos. Se le ORDENE a Colpensiones a reconocer la pensión según sus reglamentos una vez cumpla la edad. Y se imponga costas procesales.

Como supuestos facticos con que sustenta sus pretensiones, narra que estuvo afiliada al ISS hasta agosto de 1994, fecha para la cual tenía 286 semanas. Que se trasladó para la sociedad PROTECCIÓN S.A. desde agosto de 1994 sin contar con la información suficiente. Ha solicitado a las demandadas su traslado a Colpensiones, las cuales han negado su requerimiento. Que el asesor de la sociedad PROTECCIÓN S.A. no le brindó la información debida y las demandadas no le brindaron información adicional a la accionante. Que el traslado de la demandante del Régimen de Prima Media al Régimen de Ahorro Individual acusa vicios en su consentimiento.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

En sentencia del 8 de abril de 2021, el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín, DECLARÓ la ineficacia de la afiliación de la demandante al Régimen de Ahorro Individual. CONDENÓ a la sociedad PROTECCIÓN S.A., a trasladar con destino Colpensiones, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la providencia, los recursos de la cuenta de ahorro individual de la accionante, incluyendo para el efecto el capital, sus rendimientos y los recursos del fondo de garantía de pensión mínima, como si hubiese permanecido en el Régimen de Prima Media. Le ORDENÓ a Colpensiones, proceder con el recibo de estos dineros y reflejarlos como semanas en la historia laboral de la demandante. CONDENÓ a Colpensiones a activar la afiliación de la accionante, al Régimen de Prima Media. E impuso costas a cargo de PROTECCIÓN S.A.

IMPUGNACIÓN

El apoderado de Colpensiones interpone recurso de apelación, solicitando la revocatoria de la sentencia, por considerar que en este evento Colpensiones es un tercero que nada tuvo que ver en la forma como se realiza la asesoría, pero advierte que en este caso se observa que la demandante hubo una información porque se trata de una persona que trabajó directamente prestando asesorías ente 2 o 3 años, ofreció el producto y posteriormente se retiró porque la información que debía dar era compleja porque debía realizar cálculos, por lo tanto considera el recurrente que la accionante tenía conocimiento en el momento del traslado que era necesario hacer cálculos, y cuando indica que no le suministraban esa información considera que ella tenía el conocimiento que los cálculos se debían ser realizados. Sostiene que la demandante tenía todos los elementos de juicio para tomar una decisión, sabía cómo funcionaba el Régimen de Ahorro Individual, tenía una cuenta de ahorro individual, se le habló de rendimientos, se le hablo de cuáles eran las características y las tenía claras, y conocía los elementos que se tenían que acreditar en el Régimen de Prima Media para acceder a una pensión y expresa que se podía pensionar antes de tiempo. Que, si bien la A Quo consideró que las capacitaciones que recibía no se encuentran acreditadas, el apoderado recurrente le hizo preguntas respecto a las mismas a lo cual afirmó que se le hablo del régimen de transición, de la diferencia de regímenes, que se podía pensionar a una menor edad, le brindaron reasesoria y la demandante realizaba aportes voluntarios. Con base en lo anterior, considera que a la demandante se le suministro información suficiente, clara, veraz y oportuna para tomar una decisión y ante el cambio de salario es que pretende trasladarse; considera que acceder a dicha pretensión generaría una descapitalización del sistema en el sentido de financiar una pensión de esa naturaleza.

Y en caso de confirmarse la sentencia recurrida, solicita se revoque la sentencia y se ordene la devolución de los gastos de administración porque según el antecedente de la Corte Suprema de Justicia ese concepto pertenece al Régimen de Prima Media desde que el acto fue declarado ineficaz.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

El apoderado de Colpensiones presenta alegatos de conclusión manifestando que como se pudo verificar en audiencia, que la AFP PROTECCIÓN S.A, le brindó plena información sobre su traslado, dando cumplimiento al deber de información por arte de la AFP y la actora firmó voluntariamente después de haberle asesorado. Que además no se da el presupuesto del traslado antes de los 10 años de cumplir la edad para pensionarse, y que la declaratoria de la ineficacia afectaría la sostenibilidad financiera del RPM.

Así mismo solicita que Colpensiones está gobernada por el principio de legalidad, por tanto, no puede realizar más actos de los que la Ley le ha permitido, por tanto, cualquier acto administrativo que expida, debe estar acorde al ordenamiento jurídico que lo gobierna. Además, sin necesidad de efectuar un dictamen técnico al respecto, en el Régimen de Ahorro Individual se gravan los aportes de los afiliados con un porcentaje de administración, que no existe el Régimen de Prima Media; entonces por no ser equivalente, los aportes transferidos del RAIS al RPMPD, cuando se declara la nulidad y/o ineficacia del traslado (según se advierte en las sentencias CSJ SL, 8 sep. 2008, rad. 31989, CSJ SL17595-2017, CSJ SL4989-2018 y CSJ SL1421-2019, rad. 56174) hay lugar a reintegrar la totalidad de la cotización, es decir: i) Recursos cuenta individual de ahorro, ii) Cuotas abonadas al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, iii) Rendimientos, iv) Anulación de Bonos Pensionales v). Porcentajes destinado al pago de Seguros Previsionales y gastos de administración, se hagan de manera indexada.

PRONUNCIAMIENTO JURÍDICO

El problema jurídico en esta instancia gira en determinar en apelación: i) Si hay lugar a declarar la ineficacia del traslado; ii) Si hay lugar a ordenar el traslado de los gastos de administración. En el grado jurisdiccional de consulta, se deberá analizar si en el presente caso: i) Si hay lugar a ordenar el traslado de las cuotas de administración indexadas; y ii) Si hay lugar a adicionar la sentencia ordenando el traslado las sumas adicionales de la aseguradora indexadas.

Para el caso concreto no existe discusión y está acreditado en el plenario que la demandante no es beneficiaria del régimen de transición, porque a la vigencia de la Ley 100 de 1993 no tenía más de 35 años de edad al haber nacido el 9 de diciembre de 1965 (según consta en el formulario de afiliación y en copia de cedula aportada por Colpensiones a fls 19 y 136 del expediente digital); que cotizó al ISS hoy Colpensiones desde el 1º de febrero de 1989 al 31 de agosto de 1994 (fl. 130); solicitó traslado a la sociedad PROTECCIÓN S.A. el 17 de agosto de 1994 (fls. 19).

Descendiendo al caso particular, se tiene que en el INTERROGATORIO DE PARTE absuelto por la accionante, no se evidencia confesión alguna, al haber indicado que ella es Tecnóloga en dirección de ventas; que se trasladó a la sociedad PROTECCIÓN S.A. en el año 1994 porque les informaron que el ISS estaba muy mal y que se iba a acabar y que les convenía estar en un fondo privado, es información se la dio PROTECCIÓN S.A.; esa información la recibió en las oficinas porque ella es asesora en seguros y la información la recibió en las oficinas de donde trabaja; su empleador no la obligó sino que le dieron la información de los fondos privados y les mostraron el ISS se iba a acabar; esa reunión estuvieron varios asesores, y no recuerda la duración de la reunión; les hablaron de los beneficios que ellos se podían pensionar antes de tiempo, que la pensión se heredaba; cuando le hablaron de la pensión anticipada le dijeron que tenían que tener una cantidad de plata en el fondo pero no le dijeron la cantidad de dinero que debía tener; si le hablaron de la cuenta de ahorro individual pero no le dijo cual era el manejo de esa cuenta. Le hablaron de los rendimientos y no le dijo para qué servían esos rendimientos, no le habló de los requisitos para acceder a la pensión de vejez, le dijeron que en el ISS se podía pensionar con 1250 semanas y 57 años de edad y que en el fondo privado se podía pensionar antes de tiempo. Para el momento de su traslado ella ofrecía el producto de traslado del Régimen de Prima Media al Régimen de Ahorro Individual; que ella era una asesora de Seguros de Vida Suramericana para seguros, que a ella le ofrecieron la alternativa de hacer los traslados pero no tuvieron una asesoría muy amplia para hacerlo, ella ganaba la comisión y la otra parte se encargaba en PROTECCIÓN S.A. de brindar el resto de asesoría; ella no recibió comisión por su traslado; ella recibió una capacitación de PROTECCIÓN S.A. para realizar los traslados pero no fue una capacitación muy a fondo. Ella realizó

asesorías de traslado de regímenes al principio como en los primeros años, porque para hacer una buena asesoría necesitaba una capacitación completa y ella no estaba en la capacidad una buena asesoría para un traslado de régimen en las pensiones. PROTECCIÓN S.A. le brindó una asesoría antes de cumplir los 47 años fue una asesora a mostrarle los beneficios pero se llegó a la conclusión que no había un beneficio porque se iba a pensionar con un salario mínimo en ambos regímenes y a esa conclusión llegaron porque le preguntó qué pasaba si ella aumentaba sus cotizaciones y salario y ella le dijo que en cualquiera de las dos, se iba a pensionar con el salario mínimo que le recomendaba en tomar un producto de ahorro individual en pensiones voluntarias que lo tomó en esa época para aumentar la pensión a futuro. No le dijo de cuanto debían ser el aporte voluntario, pero hicieron los cálculos si aportaba sobre dos salarios más en la pensión y ello le dio \$250.000, que eso se empezó a ahorrar en el fondo voluntario. En esta reasesoría del 2012 no le dijo lo que pasaba si ella lograba salarios altos en los últimos 10 años. Al haber recibido capacitación por Protección para el ofrecimiento de los productos del Régimen de Ahorro Individual ve que no le quedó clara la información de su traslado. Ella ofreció el producto del traslado de régimen los primeros años como 2 o 3 años, no sabe cuantas asesorías brindo y al ver que era tan complejo ofrecer el producto optó por no seguirlo haciendo porque se requiere mucha información y es un producto que requiere responsabilidad para brindarla y como no se sentía capacitada no lo volvió a haber. La información era porque se le debía hacer un cálculo a las personas de la conveniencia de trasladarse y debía tener conocimiento y por ello optó en seguir ofreciendo los seguros que es lo que toda la vida ha ofrecido. A ella no le suministraron como herramienta para hacer los cálculos un software. En la capacitación que le hicieron le explicaron las diferencias de ambos regímenes; en la asesoría le explicaron en qué consistía el régimen de transición, no le explicaron cuál era el monto mínimo que tenía que aportar en el Régimen de Ahorro Individual para obtener una pensión del salario mínimo. Ella no les explicaba a las personas cuanto era el monto para obtener una pensión porque ni ella sabe cual es el monto que ella debía tener para obtener la pensión, por lo que a ella nunca le quedó claro y ella siempre pensó que las personas se pensionaban con el promedio de los 10 últimos años cotizados y no es así. En la capacitación se habló de los diferentes regímenes, pero el trabajo de ella era que las personas se trasladaran de un fondo a otro, pero no sabían explicar

bien que era, es decir, hicieron mala asesoría a los clientes y por eso ellos tenían un acompañamiento de alguien de Protección, ella hacía el traslado y las otras personas le daban al afiliado la asesoría completa para que se trasladara. Ella se trasladó con el temor que el ISS se iba a acabar y no iban a tener donde pensionarse perdiendo lo que tenía y como ella trabajaba con Suramericana pensó que iba a estar bien respaldada.

Por lo anterior el problema jurídico se resolverá en el siguiente orden:

1. De la ineficacia del traslado

Se tiene que el derecho a la seguridad social es irrenunciable conforme el artículo 48 y 53 de la CP, por ello cualquier pretensión de cambio en las condiciones de este derecho pensional debe ser tomado de manera autónoma y consiente con una comprensión volitiva tal que no quede duda que la información entregada por la entidad para que, con la libertad e información, la persona pueda decidir si se cambia de régimen o no.

Visto lo anterior, debemos revisar que con base en el art. 13 literal b) de la L 100 de 1993 que habla de la característica de la seguridad social, y señala allí: *“La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior **es libre y voluntaria** por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma, se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1o. del artículo 271 de la presente ley”,* y si nos remitimos al art 271 de la L 100 señala que **no será eficaz el traslado** si se menoscaba la libertad, la dignidad humana, los derechos de los trabajadores que son sujetos de protección, y dice que *“Cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral se hará acreedor, en cada caso y por cada afiliado...”* no solo a la multa sino que dice en forma expresa *“... La afiliación respectiva **quedará sin efecto** y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.”*, o sea que se refiere a una ineficacia.

Desde el **Decreto 720 de 1994**, por el cual se reglamenta el artículo 105 y parcialmente el artículo 287 de la Ley 100 de 1993, en el capítulo relativo a LA RESPONSABILIDAD DE LAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES Y ORGANIZACIÓN DE LOS PROMOTORES, en sus artículos 10 y 12 respectivamente reza:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PROMOTORES. Cualquier infracción, error u omisión en especial aquellos que **impliquen perjuicio a los intereses de los afiliados**- en que incurran los promotores de las sociedades administradoras del sistema general de pensiones en el desarrollo de su actividad **compromete la responsabilidad de la sociedad administradora ...**”. (Resalto fuera del texto)

“OBLIGACIÓN DE LOS PROMOTORES. Los promotores que empleen las sociedades administradoras del sistema general de pensiones **deberán suministrar suficiente, amplia y oportuna información** a los posibles afiliados al momento de la promoción de la afiliación, durante toda la vinculación con ocasión de las prestaciones a las cuales tenga derecho el afiliado.” (Resalto fuera del texto)

Este deber profesional que existe desde 1994, ese de información que permita al usuario tomar una decisión libremente consentida, es decir, **la carga de la prueba correspondería a la entidad demandada**, y que en estos casos corresponde a que se demuestre: cuál fue la información que se le entregó y en qué vastedad se presentó. Tal conceptualización se encuentra en la sentencia SL 12.136-2014, Rad. 46.292 del 3 de Sept. de 2014, M. P. Dra. ELCY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN, que reza:

“...A juicio de esta Sala no podría argüirse que existe una manifestación libre y voluntaria cuando las personas desconocen sobre la incidencia que aquella pueda tener frente a sus derechos pensionales, ni puede estimarse satisfecho tal requisito con una simple expresión genérica;....”.

Desde ahí ha existido una línea jurisprudencial, entre otras la de radicado 17.595 de 18 de octubre de 2017, en donde se dice, que la información tiene que ver con: 1º. La antesala de la afiliación hasta la determinación de las condiciones del disfrute pensional, 2º. El deber de información concreto y comprensible; y 3º. Que sea de manera prudente, y de manera más específica. Igualmente, la sentencia SL 19.447 de 2017 con radicado 47.125, que indicó que aun operaba la ineficacia del traslado si el afiliado no tiene régimen de transición.

El anterior criterio ha sido reiterado por la CSJ en sentencia SL1421, 1688 y 1689 de 2019, SL4426-2019, y de forma más reciente la sentencia SL 2611, 2877, 4811 de 2020, SL 1217 y 782 de 2021, y como juez constitucional en las sentencia STL 3716-2020, STL4001-2020 y STL4084-2020, en las cuales se manifestó que los fondos de pensiones son los obligados a dar una información clara, comprensible y suficiente sobre las consecuencias favorables y desfavorables que su decisión acarrea; y que la carga de la prueba sobre el deber de información corresponde a las AFP debiendo probar que dicha información fue realizada, con diligencia, cuidado y buena fe, sin que implique en momento alguno que la sola firma o diligenciamiento del formulario pueda entenderse verdadera información.

La anterior argumentación es aplicable a este caso, pues la entidad accionada PROTECCIÓN S.A., no trajo al plenario ninguna prueba eficaz y relativa a la posible actividad de asesoramiento e información adecuada a la parte actora, cuando tomó la decisión de trasladarse de Colpensiones, sin que les hayan dado una información suficiente y cierta al no haberse demostrado que se le habló de las desventajas del RAIS, ni de los factores cambiantes que inciden al cuantificar la mesada pensional como son la rentabilidad, las cotizaciones y la edad probable de ellas y sus posibles beneficiarios al momento de pensionarse; tampoco sobre la deducción de los gastos de administración, ni de seguros previsionales; no le informaron de la modalidad pensional que debían escoger cuando se fueran a pensionar, ni de la pensión anticipada, ni de la fecha de redención del bono pensional, tampoco hay constancia de la información sobre el capital mínimo que tenía que tener, estando la carga de probar dicha información en cabeza de la accionada ya mencionada, siendo esta la razón por lo se violenta el **derecho de libertad de selección** del régimen, además de la vulneración del derecho a la dignidad y a la seguridad social de la persona conforme el art 272 de la Ley 100 de 1993.

Al respecto debe señalarse que la afiliación inicial realizada por la parte actora, no tuvo efectos, por no existir una libertad informada al momento del traslado o de la afiliación, conforme al artículo 271 de la Ley 100 de 1993, lo que implica que dichos actos son inoponibles, son imprescriptibles y no pueden ser convalidados bajo ningún aspecto, por lo menos hasta que se cumplan los

requisitos para el disfrute pensional. Por ello no es suficiente que la sociedad PROTECCIÓN S.A. aporte formulario de afiliación, historial de vinculaciones, resumen historia laboral, reporte estado de cuenta, historia laboral, concepto del 29 diciembre 2015, comunicados de prensa, documento denominado “Políticas Asesorar para vincular personas naturales” (fl. 214 a 269), lo que lleva a concluir que al momento de trasladarse de ISS al RAIS, **no les dieron una información completa y suficiente.**

Ahora, frente a la calidad de asesora de la demandante en Suramericana Seguros de Vida, la cual es resaltada en el recurso de apelación a efectos de revocarse la sentencia, considera la Sala que la misma no genera en la demandante un conocimiento suficiente, claro, veraz y oportuno al momento de su traslado, toda vez que la misma accionante informó que ella era Tecnóloga en dirección de ventas y se desempeñaba como **asesora en seguros**, que ella realizaba la captación de los clientes para que hicieran el traslado y era PROTECCIÓN S.A. la encargada de realizar la asesoría. Por lo tanto, le correspondía al fondo de pensiones PROTECCIÓN S.A. acreditar al momento del traslado de la Sra. LIGIA LUCÍA GONZÁLEZ AVALOS cuál fue la información brindada, más aún porque del interrogatorio se extrae que en la capacitación y en la asesoría le hablaron básicamente de las ventajas del Régimen de Ahorro Individual.

Conforme a lo señalado, la sentencia de primera instancia deberá ser CONFIRMADA en lo que respecta a la declaración de la ineficacia de la afiliación y la orden dada de trasladar a Colpensiones, los recursos de la cuenta de ahorro individual de la accionante, tales como el capital, rendimientos y los recursos del fondo de garantía de pensión mínima.

2. De los efectos de la ineficacia

- Frente a la devolución de las **cuotas de administración debidamente indexados**, hay lugar a ser trasladadas conforme lo establece la sentencia SL 1688 , 1689 de 2019 y SL 782 de 2021 y teniendo en cuenta: 1º) En la ineficacia las cosas deben volver al estado en que se encontraban, entendiendo que el aporte pensional debe devolverse completo, sin que pueda admitirse que por haberse generado rendimientos o pagos posteriores a la

cotización realizada no se debe tener en cuenta el aporte completo, pues las cosas vuelven al estado en que se encontraban antes de la afiliación fallida y menos habrá de tenerse consideración alguna para la entidad que aprovechándose de la falta de información fue la que indujo a la afiliación inicial o al mencionado traslado al RAIS, 2º) porque debe tenerse en cuenta que dichos porcentajes ingresaron a la AFP accionada durante en el tiempo en que estuvo afiliado el demandante en esta, en tanto que la cuota de administración es manejada directamente por el fondo de pensiones; y 3º) porque la devolución de los gastos de administración es ordenada en la sentencia SL1421 de 2019 y el Fondo de Pensiones debía devolver *“los aportes por pensión, los rendimientos financieros y los gastos de administración al Instituto de Seguros Sociales”*, y 4) Porque si bien es cierto que el art. 20 de la Ley 100 de 1993 determina el porcentaje que se destina a financiar los gastos de administración, no se puede pasar por alto que se está bajo la figura de la ineficacia, la cual deja sin efectos jurídicos las actuaciones realizadas, lo que genera que todo lo cotizado a la AFP deba trasladarse a Colpensiones, y aunado a lo anterior, es a esta última entidad a la que le corresponde determinar el porcentaje que va a destinar a dicho rubro, por ende la Administradoras Privadas no puede librarse de su devolución por estar consagrado en dicho artículo.

Por lo tanto, se CONDENARÁ a la sociedad PROTECCIÓN S.A. a trasladar a Colpensiones las cuotas de administración debidamente indexadas.

- **Las sumas adicionales de la aseguradora** tales como la prima de reaseguros de Fogafín y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes, hay lugar a devolverlas **debidamente indexada**, teniendo en cuenta que la Corte Suprema de Justicia en las sentencias SL 17595 de 2017 y SL 4989 de 2018, en donde se rememoró la sentencia 31989 de 2008 en la cual se dijo: *“La administradora tiene el deber de devolver al sistema ..., sumas adicionales de la aseguradora,.”*

Como consecuencia de lo anterior, se ADICIONARÁ la sentencia, en el sentido de ordenar la devolución de este concepto debidamente indexadas, conforme a la sentencia SL 1689 de 2019.

Costas en esta instancia en la suma de \$908.526 a cargo de Colpensiones y a favor de la demandante, por no haber prosperado el recurso de apelación.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONDENAR a la sociedad PROTECCIÓN S.A. a trasladar a Colpensiones las cuotas de administración debidamente indexadas, de conformidad con lo analizado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ADICIONAR la sentencia de primera instancia, en el sentido de ordenar la devolución de las sumas adicionales de la aseguradora, tales como la prima de reaseguros de Fogafín y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes, debidamente indexadas.

TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás, la sentencia emitida por el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

CUARTO: Costas en esta instancia en la suma de \$908.526 a cargo de Colpensiones y a favor de la demandante.

Las anteriores decisiones se notifican en ESTADOS


Los Magistrados.



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
– SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N ° 098 del 08 de junio
de 2021

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/100>